JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022)

Ref. Incidente de desacato Gloria Arias de Esparza vs. La Nueva EPS. Radicación No. 2021-00613-01.

Se decide el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta mediante auto del 25 de enero de 2022, dentro del asunto de la referencia, por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, a la gerente y representante legal de la Regional Nororiental de la Nueva EPS, Sandra Milena Vega Gómez.

ANTECEDENTES

En sentencia de noviembre 23 de 2021, el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, concedió el amparo deprecado a través de agente oficioso y, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS que, en el término de cuarenta y ocho horas, "(...) proceda a señalar fecha para la realización de los procedimientos denominados BLOQUEO DE RAMO GENICULADOS EN RODILLA DERECHA y BLOQUEO DE NERVIOS SAFENOS DERECHOS EN CANAL DE ADUCTORES CON GUIA ECOGRAFICA, la cual no podrá exceder los 15 días hábiles (...)" así como "(...) realizar entrega de los medicamentos ACETAMINOFÉN, ESOMEPRAZOL, SUCRALFATO, KETOPROFENO GEL, ETORICOXIBTABLETA y ACETATO DE METILPREDNISOLONA, a la Sra. GLORIA ARIAS DE ESPARZA, en la cantidad y condiciones prescritas por el médico tratante (...)" (folios 3 a 17, archivo 2 c. 1).

La agente, sin embargo, dio aviso del incumplimiento del fallo, específicamente con la entrega de los medicamentos Acetaminofén, Esomeprazol, Sucralfato, Ketoprofeno Gel, Etoricoxib Tableta y Acetato Demetilprednisolona, así como en la realización de los procedimientos de bloqueo de ramo geniculados en rodilla derecha y bloqueo de nervio safeno derecho en canal de aductores con guía ecográfica, razón por la cual, se surtió el requerimiento del cual trata el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 (archivo 3 c. 1), allegándose respuesta por parte de la apoderada especial de la Nueva EPS, quien informó que los medicamentos, al igual que los procedimientos pendientes se encuentran autorizados y fueron direccionados a las entidades encargadas de su prestación.

La agente, empero, indicó en comunicación del 11 de enero de 2022, que los procedimientos antes referidos no han sido programados (archivo 7 c. 1).

En consecuencia, se dio apertura formal al incidente de desacato en contra de Sandra Milena Vega Gómez, gerente y representante legal de la Regional Nororiental de la Nueva EPS, quien, a través de la apoderada especial de la empresa, alegó que validando las gestiones desplegadas "(...) SE GENERA AUTORIZACIÓN #209450381 PARA IPS FOSCAL PARA MEDICAMENTO METILPREDNISOLONA AMPOLLA 40 MG/ML REQUERIDO PARA EL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN, ASÍ MISMO SE SOLICITA PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN AL PRESTADOR (...)", a lo que agregó que el área técnica de salud se encuentra validando el caso, recolectando soportes y gestionando el servicio de salud petitionado y ordenado en el fallo de tutela. (archivo 11 c. 1).

Decretadas las pruebas (archivo 12 c. 1), el juez de primer grado sancionó a Sandra Milena Vega Gómez con un (1) día de arresto conmutado por el pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, así como el pago de otros tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (archivo 19 c. 1), porque, a su juicio, se concretó el incumplimiento por parte de dicha funcionaria por la no realización de los procedimientos médicos de BLOQUEO DE RAMO GENICULADOS EN RODILLA DERECHA y BLOQUEO DE NERVIOS SAFENOS DERECHOS EN CANAL DE ADUCTORES CON GUIA ECOGRAFICA, así como el suministro del medicamento ACETATO DE METILPREDNISOLONA, necesario para la práctica de los señalados exámenes, pues se

limitó a advertir que habían sido autorizados para la IPS Foscal, sin que lograra acreditar la efectiva realización de los mismos, información que además fue desconocida por parte de esa IPS al contestar el requerimiento ordenado en el auto de pruebas (archivo 17 c. 1).

CONSIDERACIONES

Por sabido se tiene que “[l]a sentencia que se profiere en virtud de una acción de tutela no sólo goza de plena fuerza vinculante, propia [efectivamente] de toda decisión judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constitución Política que la instituyó de modo específico para la guarda y protección de los derechos fundamentales, reclama la aplicación urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificación, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley (...)” (C.S.J. Sal. Cas Civ. Auto ATC14 25 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01), que no son otras que las contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, norma que establece:

“La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.

En ese orden de ideas, la sanción habrá de imponerse cuando el destinatario de la tutela no cumple la orden impartida en la sentencia, de ahí que la actuación del juez a cargo del incidente “(...) se encuentre delimitada por la parte resolutive de la decisión que se acusa de incumplida, limitación con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden, su contenido y el término otorgado para su cumplimiento” (C.S.J. Sal. Cas Civ. Auto ATC1425 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01).

Empero, “(...) es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino también del factor subjetivo, dado que la desatención que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien debía cumplir la orden de protección, de modo que se impone atender elementos propios de un régimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intención de desobedecer y las posibles circunstancias de justificación” (C.S.J. Sal. Cas Civ. ATC1425 de julio 16 de 2018. Exp. 2017-00391-01).

Luego, “(...) el solo incumplimiento per se no comporta una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pues se requiere de una manifiesta desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juzgador (...) debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora” (C.S.J. Sal. Cas. Civ. Auto del 14 de septiembre de 2009. Exp. 2009-01417-00).

Pues bien, examinados, bajo ese entendido, los medios de prueba obrantes en el plenario, salta a la vista que la sanción impuesta a la gerente fue del todo acertada, pues, es lo cierto, no se acreditó la efectiva realización de los exámenes requeridos por la agenciada Gloria Arias de Esparza, conforme a la orden médica impartida por su galeno tratante.

Es que, no basta con anunciar que los procedimientos en cuestión se encuentran autorizados, ya que para validar el cumplimiento de la orden tutelar resulta necesario acreditar, en este caso, la prestación efectiva de los servicios médicos en cuestión.

Y es así, porque lo anunciado en la respuesta brindada por la apoderada especial de la EPS (archivo 11, C. 1), referente a la solicitud dirigida a la IPS Foscal consistente en la programación de los procedimientos pendientes, no logra desvirtuar el elemento subjetivo en la desatención de la decisión de tutela, pues constituye una mera manifestación que, por demás, no fue confirmada por la aludida Clínica (archivo 17 c. 1), la cual indicó no suministrar o distribuir medicamentos a los pacientes de la EPS por ser una función propia e la empresa, en atención

al requerimiento que le efectuara el Despacho de conocimiento en el proveído de decreto de pruebas.

Luego, queda en evidencia el desinterés presentado por parte de la funcionaria encargada del cumplimiento de tutelas de la Nueva EPS, si en cuenta se tiene que la orden fue emitida desde el 23 de noviembre de 2021, habiendo excedido en demasía, no solo el término perentorio de cuarenta y ocho horas allí dispuesto, sino, además, más de dos meses desde que fue proferido hasta la fecha, indicador suficiente para concluir la concurrencia de una actitud consciente y voluntaria por parte de la sancionada en el desacatamiento de la orden impartida en sede de tutela.

De suerte tal que la vulneración de los derechos protegidos a la quejosa se ha perpetuado en el tiempo, convirtiéndose en una barrera para el goce efectivo de los mismos, desconociendo la accionada la importancia en la materialización y continuidad de los tratamientos prescritos a la agenciada.

Por ende, si la finalidad del incidente de desacato la constituye “(...) la eficacia de las órdenes proferidas tendientes a proteger los derechos fundamentales reclamados” (C.S.J. Sal. Cas. Civ. Auto ATC1401 de julio 12 de 2018. Exp. 2016-00304-03), justificada resulta la sanción impuesta a la accionada, pues, nada ha hecho para dar cumplimiento al fallo en las precisas condiciones en que se impartió, lo que conduce a confirmar el proveído consultado, sin que ello exima a la EPS de cumplir la orden del juez.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Doce Civil del Circuito de Bucaramanga,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto proferido el 25 enero de 2022, en el asunto de la referencia, por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca.

SEGUNDO. - NOTIFICAR esta decisión a las partes por la vía más expedita.

TERCERO. - ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen, para que haga efectiva la sanción.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado Por:

**Hernan Andres Velasquez Sandoval
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 012
Bucaramanga - Santander**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

44547d1102c92f67e7ff552c359b911a3365eb24d00f867805736e709a66851e

Documento generado en 28/01/2022 09:47:46 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**